

**Benjamín Villena Roldán**

Profesor U. Andrés Bello e investigador LM2C2 y MIPP



Informalidad y financiamiento universitario

La propuesta del Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) tiene la noble intención de aliviar la carga financiera de estudiantes y familias. Pero tal como en la recién aprobada reforma de pensiones, subestima el riesgo de la informalidad laboral al aumentar fuertemente el costo laboral, en un escenario de productividad del trabajo estancada. Del mismo modo, con el FES se crearían incentivos para que las nuevas generaciones de profesionales prefieran recibir abiertamente pagos informales, y evitar los pagos del impuesto que se les cobraría para retribuir los recursos con que el Estado financiaría sus estudios. Sin un diseño cuidadoso, el sistema puede aumentar las actuales dificultades para hacer exigibles pagos de deuda o impuestos. Esta política pública no toma en cuenta el rol de la informalidad laboral, situación que representa alrededor de un 27% del empleo en Chile, y que podría bordear cerca de 33% con la reforma de pensiones ya aprobada en régimen (Joubert 2015). Al parecer, se supone que los trabajadores con educación superior no son informales, pero esto no es cierto. Antes de la pandemia, un 22% de los informales en Chile tenían educación superior, cifra que aumentó a un 30% durante 2020-2023 (Villena-Roldán, 2024).

Existen otros elementos en este proyecto que hacen dudoso su impacto positivo sobre la calidad y autonomía del sistema universitario chileno. Con una mayor dependencia del arancel de referencia y de regulación estatal, puede aumentar la segregación en la educación superior, con una brecha mayor de calidad entre instituciones según su participación en el nuevo sistema. Una caída en la calidad de los profesionales formados en instituciones más dependientes del Estado, sumado a la obligación tributaria, podrían intensificar aún más los incentivos a la informalidad. La elaboración de políticas económicas requiere con urgencia una visión global de los impactos que estas pueden causar en forma indirecta a la economía como un todo. En un escenario de costos laborales crecientes, el financiamiento de la educación superior debe balancear cuidadosamente los costos y beneficios y reasignar los escasos recursos disponibles para permitir que cada estudiante opte por una carrera e institución que le brinde la mayor empleabilidad e ingreso en el mediano plazo.